



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 2747 / 2024 - AML

Autos: “CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 2747/2024

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N ° 2023-156-E, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, actualmente ARCA) rechazó el recurso de revisión interpuesto por la contribuyente CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A, contra la RES-2022-19E-AFIP-DVJUDA#SDGTLSS. II.- Contra ello, la actora, interpuso recurso de apelación, dentro del plazo prescripto por la legislación aplicable en la materia.

Asimismo se le notificó lo resuelto y se le comunicó que la resolución era susceptible de ser recurrida ante esta Alzada, debiendo depositar dentro de los plazos correspondientes el importe resultante de la resolución administrativa (art 15 de la ley 18.820 y art. 39 bis del decreto ley 1285/58 modificada por ley 24.463. Interpone la parte actora recurso de apelación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, informa que la contribuyente cumplió con el pago del depósito previo, a los fines de la apertura de la instancia judicial, y dejó constancia que la suma total depositada no incluía la multa establecida (RG AFIP 1566/2010). Ello así, en el caso particular de autos, se considerará procedente la apertura de la instancia pues lo contrario implicaría consentir que circunstancias formales conduzcan a la frustración del valor justicia.

La cuestión debatida ha sido motivo de pronunciamiento por esta Sala en autos “Johnson Acero S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ impugnación de deuda”, Sent. def. nº 90.594 del 7/2/01” y “Dr S. A. s/ impugnación de deuda”, sentencia interlocutoria N° 57654 del 24/02/04.

II.- La parte actora se agravia de lo decidido y manifiesta que el rubro bajo análisis –ayuda escolar- resulta un beneficio social no remunerativo, en los términos del art. 103 bis inc. g), de la Ley de Contratos de Trabajo, por lo cual no debería pagar cargas sociales. Argumenta que en el 2009, suscribió un acuerdo con los distintos sindicatos correspondientes a la actividad de la empresa, motivo por el cual se la incorporó al Convenio Colectivo de Trabajo 375/99 “E” el “complemento de ayuda escolar”. También señala que presentó la solicitud de homologación del referido convenio, por ante el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el art. 6 de la ley 23.546. Menciona que el art. 103 bis de la LCT, en el punto g), establece como beneficio social “la provisión de útiles”, pero que dada la dispersión geográfica con la que cuenta la empresa, no fueron entregados en especie. Agrega que con posterioridad a la notificación de la resolución denegatoria emitida por el organismo fiscal, el



ministerio dictó la disposición DI-2023-89-APN-DNRYRT#MT, mediante la que se declaró la homologación del acuerdo relativo a la “Incorporación al CCT 375/99 “E” “Ayuda Judicial”, cuyo registro es el número 454/2023.

III.- De esta manera, cabe señalar que las presentes actuaciones tienen su origen en la deuda determinada por el fisco, mediante las actas de inspección e infracción, dictadas en virtud de la OI N° 1.809.259.

La cuestión a resolver radica en la procedencia o no de los cargos formulados por el pago del concepto “Complemento de Ayuda Escolar”, abonado en dinero y no en especie como sería la entrega de útiles, todo ello a los empleados con hijos menores y en edad escolar.

En este contexto cabe señalar que, los Convenios Colectivos de Trabajo son una fuente de regulación del derecho del trabajo (cfr. art. 1 de la LCT). Mediante ellos se pueden fijar condiciones de trabajo y empleo en distintas categorías laborales y oficios, respecto a los empleados que se encuentran comprendidos en una determinada actividad.

Particularmente, el CCT 375/99 es el Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados de la industria del gas en Argentina, específicamente de Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A.. Regula las condiciones laborales para los trabajadores del sector, incluyendo salarios, jornada laboral, vacaciones, licencias, horas extras y otros adicionales.

Así las cosas, resulta adecuado indicar que la doctrina en general ha receptado ampliamente la noción que al margen del salario que corresponde al trabajo cumplido o prometido, el trabajador obtiene otros ingresos o beneficios, denominados salarios sociales o beneficios sociales.

Dichas prestaciones no corresponden al servicio prestado, sino que son consecuencia del contrato de trabajo o de su condición de trabajador , o simplemente, por el hecho de ser miembro de una sociedad(ver Fernández Madrid Juan Carlos, “Tratado Práctico de Derecho de Trabajo”, Bs. As., La Ley, T° II, pag. 1189 y ss.).

De la misma manera, la doctrina ha destacado como una de las características fundamentales de los beneficios sociales, que su implementación debe asegurar el goce efectivo del beneficio, evitando desviaciones que puedan darse, por ejemplo si se efectiviza la entrega directa de dinero o valores (ver Fernández Madrid Juan Carlos, op. Cit.).

En concordancia con ello, se observa que el art. 103 bis de la LCT -introducido por la Ley 24.700-, define claramente a los beneficios sociales como las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables, ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador, y que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo.

Sin perjuicio de ello, resultan atendibles los argumentos de la apelante al afirmar que la entrega en dinero obedecía a la gran dispersión geográfica de las empresas, lo que dificultaba la entrega en especie.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Ahora bien, respecto a la no homologación del convenio en la que el organismo fiscal fundamentó su resolución, tal lo afirmado por la parte actora fue homologado mediante Disposición DI-2023-89-APN-DNRYRT#MT, e incorporar "... al CCT 375/99 "E": Ayuda Escolar", procediéndose a su registro bajo el número 454/2023.

De tal modo, con dicha homologación se vislumbra que la propia autoridad de aplicación, consideró que las clausulas pactadas en el convenio, no contenían aspectos que alterasen el ordenamiento legal vigente.

Arribar a una conclusión contraria, convalidaría una contradicción entre el organismo fiscal que determina deuda al otorgar carácter remunerativo a las sumas en cuestión y el organismo ministerial que le otorga carácter no remunerativo a las sumas percibidas en concepto de "ayuda escolar".

Por tal motivo, en el entendimiento que los Convenios Colectivos de Trabajo son una fuente de regulación de derecho del trabajo, cuyo objetivo es –como se explicitara- fijar las distintas condiciones para los trabajadores y empleadores en ellos comprendidos, una vez homologado por la autoridad competente resultan de aplicación obligatoria.

Por todo lo expuesto, se concluye que cabe revocar la resolución recurrida, conforme a lo fundamentado precedentemente.

IV) En atención a que la AFIP no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).

Por ello, de conformidad, en lo pertinente, con el dictamen del Sr. Fiscal General, este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la resolución recurrida, de acuerdo a las fundamentaciones expuestas en la presente; 2) Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública –dependiente de la CSJN (conf. Ac. 10/25) y, oportunamente, remítase.

